



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA CIVIL

Medellín, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2.023)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 001 2000 00517 09

Proceso: Ejecutivo Hipotecario.
Demandante: EUGENIO ARREDONDO DÍAZ y otro.
Demandada: PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.,
en lo sucesivo PCA S.A..
Extracto: No se configuran las nulidades invocadas. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por INVERSIONES AMAYA CAMPUZANO S.A.S.¹, contra el auto calendado el veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022), proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

ANTECEDENTES

Mediante auto del 15 de junio de 2.021 el *a quo* indicó que como el avalúo del inmueble a rematar data de marzo de 2.018, y como se requiere que el mismo esté vigente para la almoneda (artículo 444 del C. G. del P.), requirió a “*todos los sujetos procesales*” para en el término de veinte (20) días allegaran una nueva valoración, a lo que el codemandante EUGENIO ARREDONDO DÍAZ se opuso, solicitando “*dejar sin efecto*” esa decisión, y subsidiariamente presentó los recursos de reposición y apelación.

¹ INTERBANCO S.A. cedió su crédito a RECUPERADORA Y COBRANZAS S.A., quien hizo lo mismo en favor de INVERSIONES AMAYA CAMPUZANO S.A.S..

Tales pedidos se sustentaron en que la ALCALDÍA DE MEDELLÍN, mediante el Decreto 989 de 2.020, declaró la “urgencia manifiesta” por la temporada de lluvias, problemática que afectó la propiedad a evaluar, pues le afectó el fenómeno de “socavación”, de ahí que se desconocen las condiciones jurídicas, técnicas y de uso del suelo, y cambiaron las características que *ab initio* se informaron en el proceso, siendo la estimación querida “*impracticable*”, debiéndose esperar a que culminen las obras y etapas requeridas para superar tal emergencia².

El 31 de agosto de 2.021 INVERSIONES AMAYA CAMPUZANO S.A.S., se apuso a la petición de ARREDONDO DÍAZ, arrimando avalúo del correspondiente inmueble por valor de \$7.739'573.651.00, precisando que no es dable dilatar el asunto, y que debe fijarse fecha de remate³.

Resolviendo lo anterior, en providencia del 14 de febrero de 2.022, el *a quo* decidió dejar sin efectos el requerimiento para el reevalúo, agregando que el “*trámite que queda suspendido hasta que exista constancia de la superación de los hechos que motivaron la urgencia manifiesta...*”, disponiendo oficiar a la Alcaldía de Medellín para que informe al respecto; asimismo, ordenó efectuar liquidación adicional de costas conforme lo indicado en el auto del julio 27 de 2.020, esto es, aplicando los porcentajes según el concurso de créditos “*en la medida de lo posible con la suma de \$ 576'230.755.00, valor de los títulos que en este momento existen constituidos.*”.

Ese mismo día, pero en otro auto, se liquidaron las costas ordenadas, así como se aprobaron⁴.

El pedido de nulidad:

INVERSIONES AMAYA CAMPUZANO S.A.S. presentó nulidad frente a estos dos últimos autos, aduciendo que no hubo traslado de la solicitud

² Archivo 35.

³ Archivos 39 y 40.

⁴ Archivos 44 y 45.

y recursos propuestos por ARREDONDO DÍAZ; sobre las costas, que se aprobaron cuando el auto que ordenaba su liquidación no estaba ejecutoriado, situaciones que configuran las causales dispuestas en los numerales 2° y 6° del artículo 133 del C. G. del P., transgrediéndose el debido proceso, específicamente la contradicción y defensa.

Agregó que este proceso ejecutivo cuenta con sentencia hace más de 15 años, y aunque hubo valuación vigente en el año 2.019, no se ha fijado fecha para remate, quedando en entredicho sus garantías procesales, donde por la naturaleza y antigüedad de este asunto (iniciado en 2.000), requiere prioridad, debiéndose tomar medidas de cara a la almoneda. Criticó que el *a quo* decretó la suspensión del proceso sin adecuarse a las causales del artículo 161 procesal civil⁵.

En traslado a lo anterior el codemandante ARREDONDO DÍAZ, señaló en cuanto al traslado, que se dio conforme el artículo 9 del Decreto 806 de 2.020, enviándose el 21 de junio de 2.021 el memorial contentivo de sus pedidos vía correo electrónico, tanto al Juzgado como a las partes, destacando que quien alega nulidad se pronunció el 31 de agosto de 2.021. Sobre las costas, que no es requisito que la orden de liquidación esté ejecutoriada, y por todo lo anterior sostuvo que no existe la invalidez deprecada⁶.

De la resolución en primera instancia y la alzada:

Mediante el auto apelado se resolvió, entre otras, la nulidad propuesta, la que se negó tras considerarse que “*se funda en la omisión de un traslado que legalmente operó.*”.

Explicó que en atención al artículo 3° del Decreto 806 de 2.020, es deber de las partes enviarse entre sí y al Juzgado el ejemplar de los memoriales que realicen, sin que sea necesario el traslado por secretaría según lo dispuesto en el párrafo del artículo 9° ídem.

⁵ Archivo 49 del Expediente Digital.

⁶ Archivo 50 E.D.

Resaltó que quien presenta la nulidad: 1) recibió copia del escrito presentado por el codemandante ARREDONDO DÍAZ, por lo que *“no tenía porqué esperar que se le otorgara el traslado que dice haber esperado”*; y, 2) se pronunció el 31 de agosto de 2.021, escrito que no se tuvo en cuenta por extemporáneo.

En cuanto a que se realizó la liquidación adicional de costas sin encontrarse ejecutoriado el auto que la dispuso, aclaró que esa liquidación fue ordenada desde la decisión del 27 julio de 2.020, lo que se encontraba opacado por otras actuaciones, por lo que se trató de una orden a la Secretaría en tal sentido y respecto de una providencia que ya había alcanzado su ejecutoria⁷.

INVERSIONES AMAYA CAMPUZANO S.A.S. apeló, manifestando que el Juzgado de primera instancia tomó una posición *“conveniente”*, pues en vigencia del Decreto 806 de 2.020 ha corrido traslado de otras solicitudes, tal como se evidencia en la plataforma de consulta de procesos *“siglo XXI”*, donde apropósito, las actuaciones no se denominan adecuadamente, generándose inseguridad e inconsistencias procesales.

Que el escrito presentado por ARREDONDO DÍAZ contenía recurso de reposición y en subsidio apelación, por lo que así debió resolverse, y no con un auto que *“deja sin efecto”* la orden para un nuevo avalúo, situación que conllevó a pretermittir la instancia, donde si se trataba era de un control de legalidad, debió declarar la nulidad.

⁷ Sobre lo suspensión del proces, dijo que se afronta una situación excepcional, que implica no realizar el avalúo, ya que; *“... lo que se busca es que no se afecte la credibilidad del avalúo, siendo por ello que es valedero repetir que en las actuales circunstancias y mientras no se supere la urgencia manifiesta que tiene en vilo la aptitud del predio, nadie, por experto que sea, puede estar en capacidad de determinar hacia el futuro la utilización que pueda darse al predio, la que ciertamente, se repite, debe ser objeto de actualización y por consiguiente cualquier valor que se le asigne puede resultar mentiroso, discordante con la situación jurídica del bien e intolerable por el juez que debe velar por los intereses de todas las partes, al punto que en ejercicio de su capacidad discrecional puede atajar cualquier tentativa de fraude procesal, en este caso antes de propiciar un remate del bien que se haya en las condiciones apuntadas.”*

Criticó que se haga referencia a la tentativa de fraude procesal cuando se pide el remate en un proceso con más de 15 años, y en cuanto a lo “*impracticable*”, se está valorando la prueba sin decretarse ni practicarse, siendo que uno de los fines de la pericia es que se explique técnica y jurídicamente el estado de aquel, así como las circunstancias que afectan su valor, insistió en que existe una transgresión indefinida y sin causa legal que transgrede el debido proceso.

Pidió revocar la decisión apelada, y en su lugar declarar la nulidad y la improcedencia de la suspensión decretada, y también que se ordene se fije fecha para remate.

Concedida la alzada y al verificarse que estamos ante providencia apelable (artículo 321.6 del C. G. del P.), se procede a resolver de plano el recurso, tal como lo prevé el artículo 326 ídem, previas:

CONSIDERACIONES

Precisión preliminar:

Debe recordarse que el inciso 3º del artículo 162 procesal civil, señala: “*La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la decrete.*”, donde tal regla vista en armonía con el último supuesto normativo del inciso final del artículo 159 del mismo ordenamiento, cuando indica; “*Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.*”.

Si ello es así, en principio esta Corporación no podría proferir la providencia que aquí es pronunciada. No obstante, considera la Sala que los efectos del artículo 162 refieren inescindiblemente a la norma que antecede, el artículo 161, por lo que tal consecuencia no abarca lo dispuesto en el auto del 14 de febrero de 2022, aunado que lo que se

decidió fue sobre *“la presentación de un nuevo avalúo del bien inmueble vinculado a este proceso, trámite que queda suspendido trámite que queda suspendido”*, sin que se refiera a la integridad del proceso; de ahí, que la Sala se pueda pronunciarse como en efecto lo hace.

Precisado lo anterior debe decirse que el recurso de apelación busca que el Superior funcional estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, enmarcado ello en el principio de limitación, punto este al que también aludiremos al final de la presente.

Sobre las nulidades:

De lo titulado, ha dicho la doctrina que son irregularidades que se presentan en el marco de un trámite y vulneran el debido proceso, y por su gravedad invalidan las actuaciones surtidas, por eso, declarándolas se controla la validez de la actuación y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso⁸.

Las causales son taxativas⁹, es decir, son las previstas expresamente en la ley, donde la oportunidad de alegarlas es en *“... cualquiera de las instancias antes de que se dicten sentencia o con posteridad a ésta, si ocurrieren en ella.”*, tal como lo indica el artículo 134 del C. G. del P..

En el asunto en estudio la recurrente basa sus pedidos en los numerales 2° y 6° del artículo 133 ídem¹⁰, por lo que el problema jurídico consiste

⁸ Corte Constitucional, sentencia T 125 de 2010.

⁹ Sobre el punto, la doctrina ha dicho: *“... La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso”*. (Sentencia T-125/10).

¹⁰ Tales normas rezan así: *“El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia” y “6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o recorrer su traslado.”*

en confrontar dichas normas con lo alegado por la recurrente, ahí se determinará si hubo pifia en el “*traslado*” o si se “*pretermitió la instancia*”, lo cual se desarrollará en ese orden tal como sigue.

Solución al caso concreto:

Está claro que ante el requerimiento realizado por el *a quo* el 15 de junio de 2.021 –sobre que se aportara un nuevo avalúo-, hubo oposición del codemandante EUGENIO ARREDONDO DÍAZ, tal como atrás se indicó, donde el correspondiente memorial del 21 de junio de 2.021, se denominó: “*SOLICITUD DEJAR SIN EFECTO AUTO, EN SUBSIDIO INTERPONGO RECURSOS*”.

De tal escrito debía darse el traslado que trata el inciso 2° del artículo 319 del C. G. del P., el cual no requiere auto ni constancia en el expediente según lo dispone el artículo 110 ibídem, a lo que se agrega que los artículos 3° y 9° del Decreto 806 de 2.020, vigente para esa época (año 2.021), señalaban que:

“Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones a través de medios tecnológicos ... y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.”, al paso que el parágrafo del artículo 9° ídem explicaba: *“Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.”* Subraya adrede.

Sobre ello el codemandante ARREDONDO DÍAZ afirmó:

“Al respecto cabe señalar que el memorial de fecha 21 de junio de 2021 a que refiere la apoderada de la CESIONARIA – PARTE DEMANDANTE fue remitido por la apoderada del señor EUGENIO ARREDONDO DÍAZ, de manera concomitante y mediante correo electrónico del 21 de junio de 2021 a las 14:48 horas, al juzgado y a los apoderados de las partes, lo que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 dio lugar al traslado que alega la apoderada de la CESIONARIA – PARTE DEMANDANTE no haberse surtido ...”

Lo anterior fue revisado, constatándose que en el expediente no existe prueba del envío electrónico que se dice se hizo a la hoy recurrente, es decir, de tal dicho no hubo soporte, ausencia que en principio daría pie para acceder a la invalidez basada en la omisión del respectivo traslado; sin embargo, aunque no está la constancia del referido correo electrónico, la interesada en la nulidad actuó convalidando la actuación.

Se dice lo anterior en la medida que el 31 de agosto de 2.021 INVERSIONES AMAYA CAMPUZANO S.A.S. presentó memorial con dos propósitos: uno, adjuntando la pericia valuadora respecto al bien objeto del proceso, y; dos, indicando *“Descorro el traslado de la solicitud de “Dejar sin efectos” y en subsidio presentar recursos”* Subraya adrede.

Es decir, quien hoy recurre se queja de la omisión del traslado, pero resulta que se pronunció aludiendo al mismo, hecho que estropea su tesis, pues demuestra que, previo a los autos del 14 de febrero de 2.022, conoció las solicitudes que su coparte radicó el 21 de junio de 2.021, y de hecho las citó en el memorial que arrió (ver el hecho “4.4” del escrito de nulidad), tornándose aplicable el principio de convalidación, el cual es definido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, así:

“Según el principio de convalidación que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: “si el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia tácita o expresa de la parte que sufre lesión por la nulidad. (...) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha...”. STC14449-2019.

Valga anotar que si la interesada en la invalidez convalidó lo actuado, no es del caso acceder a su pedido, incluso resulta extraño que la nulidad solo se radicó con posterioridad a los autos del 14 de febrero de 2.022. Este punto no prospera.

En relación al presunta *“pretermisión de instancia”*, es algo insanable a la luz del parágrafo del artículo 136 del C. G. del P., aquella según la Sala Civil de la Corte, consiste en:

“... la omisión completa o íntegra y no parcialmente, por ignorancia, olvido o rebeldía de los diversos grados de competencia funcional asignada por la ley a los diversos fines en un proceso determinado, sean ambos o el único previsto en la ley, o solamente alguno de ellos, el primero o el segundo...” [y] “supone una grave ruptura de la estructura del proceso y desconoce la garantía constitucional de la defensa en juicio.”. Entreparéntesis fuera del texto. SC4960-2015

Revisada la actuación del *a quo* no se avizora un comportamiento tal, para lo resuelto se tenía competencia; y si lo cuestionado es que el *a quo* debió pronunciarse concretamente frente a las solicitudes de ARREDONDO DÍAZ, al respecto existían los recursos ordinarios, mismos que se ejerció INVERSIONES AMAYA CAMPUZANO S.A.S., quien también recurrió en reposición y apelación los autos atacados vía nulidad, de donde no se advierte la vulneración de garantías procesales, menos de la contradicción y defensa.

Finalmente, es cierto que la liquidación de costas estaba ordenada desde el 27 de julio de 2.020, lo que se advierte en el archivo “1” del Expediente Digital.

Consideración adicional:

Ciertamente por el principio limitación (artículo 328 C. G. del P.), esta Corporación no puede pronunciarse sobre temas no apelados; sin embargo, la misma norma da la posibilidad de proferir *“decisiones que deba adoptar de oficio”*, aunque ello al parecer se cerraría tratándose de autos, cuando tal artículo en su numeral 3º señala: *“En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.”*.

Lo anterior no obsta para que el juez *ad quem*, tome determinaciones como declarar nulidades tal como lo ha indicado reiteradamente la jurisprudencia¹¹, sin que con ello se transgreda el principio de limitación;

¹¹ Al respecto la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil y siguiendo su línea jurisprudencial, indicó: *“Vistas así las cosas, en todos los eventos en que el juzgador de segundo grado advierta la «falta de integración del contradictorio» resulta imperioso, tal como se procedió en CSJ SC1182-2016, a anular el proveído apelado, para que el inferior tome los correctivos*

es más, las medidas de saneamiento proceden incluso después de proferirse sentencia, tal como lo contempla el artículo 134 del mismo ordenamiento procesal civil.

Entonces, si bien no tomaremos decisión sobre el particular, trayendo de presente el artículo 42 del C. G. del P. referentes a los deberes del Juez, entre los que están “*Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal.*”, preocupa a la Sala que al parecer dentro del referenciado la suspensión se haya dispuesto indefinida del proceso.

Si así fuera, una suspensión de tal característica, no cuenta con el respaldo del ordenamiento (artículos 161, 611, 145, entre otros, todos ellos del C. G. del P.), máxime en un asunto que supera del veinte años en el trámite, y que desde el 12 de agosto de 2.005 cuenta con la sentencia de segunda instancia ordenando seguir adelante la ejecución¹².

Corolario, se confirmará la decisión atacada, con la precisión hecha en cuanto a la dirección procesal. Sin costas en la medida que no se observan causadas (artículo 365.8 del C. G. del P.).

necesarios que garanticen el debido proceso de quien no ha sido vinculado a la litis, cuando debió hacerse desde un comienzo.” Sentencia SC2496-2022 del 10 de agosto de 2022.

¹² La sentencia de segunda instancia fue proferida el 12 de agosto de 2.005 por este Tribunal en los siguientes términos:

“Primero: REVOCA el numeral primero de la sentencia de procedencia, naturaleza y fecha indicadas y en sustitución:

“Dispone continuar la ejecución también por el pagare FNA 003- 990073 a favor de BANCO INTERCONTINENTAL S.A. -INTERBANCO- conforme se dispuso en el mandamiento de pago, precisando que el interés de plazo no podrá exceder del bancario corriente, y en todo caso por debajo de la tasa de usura, tomando en cuenta sus variaciones entre en 20 de octubre de 1999 y el 20 de abril de 2000. El interés moratorio será tasa y media del bancario corriente tomando en cuenta sus variaciones, a partir del 21 de abril/2000 y hasta la fecha en que se haga el pago.

“Segundo: Complementa el numeral segundo disponiendo que con el producido de la venta del inmueble se pague con preferencia el crédito del BANCO INTERCONTINENTAL S.A. - Interbanco-, por el primer grado de la hipoteca.

“Tercero: Complementa el numeral tercero, disponiendo también condena en costas del proceso a favor del BANCO INTERCONTINENTAL S.A. -INTERBANCO- y en contra de la demandada P.C.A. S.A. y del Tercero Acreedor EUGENIO ARREDONDO DIAZ, éstos las asumirán por mitad por la primera instancia.

“Cuarto: Sin lugar a costas en la segunda instancia.”. Ver folios 22 a 30 del archivo 9 (4) y folios 1 a 15 del archivo 9 (5) en el Expediente Digital. Negrilla adrede.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto calendado el veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022), proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, según lo motivado.

SEGUNDO: El *a quo* deberá considerar sus deberes de Dirección Procesal expuestos en la parte motiva de esta decisión, dentro de la órbita de su autonomía y en apego del artículo 230 Constitucional, que en este caso concuerda con los artículos 4º de la Ley 270 de 1996, y los numerados como 2º, 8 inciso 2º, y 42.1, estos del C. G. del P..

TERCERO Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen. Sin costas.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO